

NOTAS SOBRE LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

(Evento del CEDOH, 23 de octubre de 2014)

I – En Honduras, la tendencia a militarizar las políticas o medidas de seguridad pública adquiere, por razones de historia reciente, la forma de una “remilitarización”. Al remilitarizar lo que ya creíamos un tanto ingenuamente que habíamos desmilitarizado, se impone la necesidad de afinar más el concepto de “desmilitarización inconclusa”.

Se está produciendo en la actualidad, por la vía de la remilitarización, una evolución contradictoria en las relaciones cívico-militares, que, al final, podría concluir en una lamentable y peligrosa involución política. La tendencia militarista del gobierno distorsiona el proceso de construcción democrática y frena la transición política.

II – La remilitarización de la seguridad pública se convierte, en estos momentos, en una forma encubierta, vergonzante, de la politización partidaria de los temas de seguridad. Al remilitarizar la seguridad, el gobierno replantea el modelo de relacionamiento entre los militares y la sociedad, entre el Estado y la sociedad. El gobernante se convierte, por esta vía, en una especie de “hombre fuerte”, figura dominante, revestida en demasía de poder militar y policial al mismo tiempo.

Al politizar el gran tema de la seguridad pública, el régimen introduce y difumina todavía más el virus del sectarismo partidario entre los órganos operadores de justicia. De esa forma, los debilita y corrompe.

III – La remilitarización es la forma involuntaria en que el Estado reconoce la ausencia de una Política Integral de Seguridad y acepta su incapacidad institucional para hacer frente, con la Policía, a los grandes desafíos de la delincuencia común y del crimen organizado.

Incapaz de diseñar y aplicar una política pública de carácter estatal y de largo alcance en materia de seguridad, el régimen acude a la politización partidaria para instrumentalizar en beneficio propio los órganos de la seguridad del Estado. Remilitarizar equivale a retroceder en el tiempo, volver al pasado, ante la ausencia de una real perspectiva de futuro.

IV – La remilitarización refleja la debilidad institucional del Estado y la incapacidad de las élites políticas tradicionales para gestionar un adecuado y democrático manejo de la seguridad ciudadana. Es una prueba de la impotencia del actual liderazgo político para procesar los conflictos sin tener que apelar a la tutela y el arbitraje castrense.

Al remilitarizar, el gobierno debilita al Estado, al sistema de partidos y a la democracia misma.

V – La remilitarización es, además, una reafirmación directa de las tendencias autoritarias y concentradoras de poder que caracterizan el estilo de gobierno actual. La consolidación de un presidencialismo a ultranza, vertical y rígido, conduce a un mayor debilitamiento institucional y al deterioro creciente del Estado de derecho.

VI – La remilitarización crea y recrea espacios propicios para los abusos de poder y la correspondiente violación de los derechos humanos. Por lo tanto, debilita al sistema de justicia, deteriora la legalidad y, al final de cuentas, genera un clima de creciente y peligrosa

crispación e ingobernabilidad políticas. De hecho, al remilitarizar la seguridad pública, el régimen crea un nuevo tipo de “inseguridad ciudadana”, la que atenta contra los derechos y garantías básicos de la gente.

VII – La remilitarización profundiza la peligrosa distorsión existente entre los ámbitos de la seguridad pública y los de la defensa, introduciendo mayor confusión en el tema y borrando las necesarias fronteras que deben existir entre la función de la defensa externa del país y la protección de su orden público interno.

VIII – La remilitarización crea **percepción de seguridad**, pero no crea **seguridad**. Produce una cierta sensación de sosiego entre la población acosada por la delincuencia, pero carece de la sostenibilidad y coherencia suficientes para volverse un factor real de seguridad ciudadana.

La remilitarización estimula el desarrollo del llamado “pensamiento ilusorio”, el que hace que los gobernantes asuman la realidad tal como la desean y sueñan y no como es en verdad. Se obnubilan y recrean una falsa realidad como si fuera la verdadera.

IX – La remilitarización es, por si fuera poco, muy cara y financieramente inviable. El alto costo económico de mantener a los militares patrullando las calles debe sumarse al elevado costo político que se deriva de sus abusos y violaciones constantes de los derechos ciudadanos.

X – Finalmente, aunque no por eso menos importante, la remilitarización introduce elementos de descontento y rechazo silencioso al interior de la propia institución armada, que ve lesionado su pretendido profesionalismo y resiente la reconversión forzada de su rol como soldados, convertidos de pronto en policías. Otro tanto sucede al interior de la propia Policía, en donde se incuba y consolida un discreto pero creciente malestar por el desplazamiento institucional a que están siendo sometidos.